

7. APUNTES URBANOS: ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA CONFLICTIVIDAD EN LA METRÓPOLI

Las páginas que siguen no pretenden ser un análisis exhaustivo de lo que han sido los conflictos urbanos en Barcelona durante los últimos veinte años, sino abrir algunas líneas de reflexión que permitan evaluarlos críticamente: más allá de la simplificación que oscila entre el énfasis de la victoria obtenida en determinadas acciones como del esteticismo que mitifica la derrota.

Desde un punto de vista político, la reestructuración capitalista iniciada a principios de los años 70 tiene como objetivo prioritario la descomposición de la resistencia obrera ligada a la gran concentración productiva fordista de los países industrializados. Si, por un lado, la deslocalización productiva a escala mundial induce un creciente proceso de terciarización y una nueva posición de la población asalariada de los países desarrollados dentro de la cadena productiva mundial, por otro, la dispersión productiva en el territorio a escala regional da como resultado la extensión del conflicto de la fábrica hacia la metrópoli, entendida no sólo como núcleo histórico, sino como conjunto de poblaciones y áreas productivas de la conurbación metropolitana.

De hecho, toda la conflictividad ligada a la reestructuración, sean las movilizaciones del sector de la automoción, las huelgas del transporte de viajeros y mercancías, o las huelgas de los productores de la mercancía espacio urbano, como el sector de la construcción, tienen un impacto que trastorna la ciudad en la medida que interrumpe el flujo de la circulación/acumulación de capital. Al fin y al cabo, colapsar la ciudad es una forma de dejar constancia del conflicto en el territorio, así como la demostración práctica de la capacidad de cualquier colectivo de asalariados para ejercer presión en defensa de sus intereses contra los centros del poder económico, político y social.

La deriva ciudadanista de la contestación social y la recuperación de las movilizaciones de los proyectos de la ciudad-negocio (voluntariado, Barcelona 92, etc.), junto con la escasa relevancia de las movilizaciones de contenido antagonista (por ejemplo, la okupación y la vivienda), plantean muchos interrogantes en torno a la capacidad del ciudadano, donde prevalece la condición de consumidor, a la hora de resolver las contradicciones y limitaciones de este mismo ciudadano en su dimensión de asalariado dentro del proceso mundializado de producción del capital.

LA JUGADA OLÍMPICA

El espectáculo olímpico de 1992 es un hito en la conversión de Barcelona en ciudad-negocio y, en consecuencia, en la tendencia hacia la integración del territorio urbano dentro del proceso de valorización del capital.

Si la especulación inmobiliaria había sido uno de los factores de la acumulación de capital durante el desarrollo franquista, ahora recibe un nuevo impulso cuantitativo y cualitativo. La expropiación del territorio urbano al uso público para ponerlo al servicio de la acumulación privada de beneficios (terrazas para bares, corte de calles para la carrera del Corte Inglés, restricciones impuestas por las zonas comerciales, etc.) requiere una intervención sobre el espacio de gran alcance y en diferentes niveles, tal como queda reflejado en otros capítulos de este libro.

Ahora bien, lo que llama la atención de todo este proceso de transformación de la ciudad en mercancía es la relativa facilidad con que la Administración recondujo la resistencia contra los planes de modernización. Así, aunque la intervención urbana amparada tras la declaración de Barcelona como sede olímpica el 17 de octubre de 1986 levantó diferentes núcleos de resistencia¹, fue sólo en la movilización del barrio del Besós contra la construcción de unas viviendas en una zona reclamada por el barrio como equipamiento, donde se consiguió un máximo nivel de tensión.

En el barrio del Besós hubo una verdadera insurrección popular² que mostró un grado de creatividad y combatividad social, expresada mediante la autoorganización y la acción directa en defensa del espacio, que logró hacer recular los planes de la Administración. A pesar, no obstante, de toda la demagogia vertida por los medios de comunicación durante la campaña de desprestigio contra los habitantes del barrio, y a pesar de la brutal represión policial, la gente resistió y consiguió lo que quería. Y fue así, entre otras razones, porque en el Besós fueron los mismos vecinos los que condujeron la lucha a su manera y con sus propios medios.

Al fin y al cabo, el barrio del Besós acumulaba una tradición de lucha del pasado reciente que enseguida se tradujo en una dinámica de acción directa y asambleas de los habitantes del barrio con una clara conciencia de lo que querían y de los medios para conseguirlo. De todos modos, en los otros conflictos, como la aluminosis en el Turó de la Peira, el plan de expulsión de la Mina, ligados de una manera u otra al proyecto de transformación de la ciudad olímpica, el proceso y los resultados fueron diferentes. Tanto en Nou Barris, contra las obras del segundo cinturón, como en el Casco Antiguo, Pueblo Nuevo o el plan de demolición y expulsión de La Mina, la acción de los vecinos estuvo condicionada por el nivel de influencia de las instancias de mediación social, especialmente, asociaciones de vecinos, pero también los partidos, sindicatos, instituciones cívicas, etc., que dieron soporte activo para que se llevara a cabo el proyecto olímpico. Así, por ejemplo, durante la huelga de la construcción de mayo de 1988, los sindicatos negociarían un plan para el cumplimiento del calendario de ejecución de las obras olímpicas.

A pesar de todo, la resolución de los conflictos y la obtención de la paz social necesaria para llevar a cabo el proyecto olímpico se consiguió no sólo con represión y mediación legitimadora de las instituciones de representación, sino también con concesiones por parte de la Administración y un replanteo a la baja de los objetivos de algunos de los planes de intervención sobre el territorio. En La Mina, por ejemplo, la expulsión de población y la reordenación del barrio se aplazó y, parece ser ahora, con la intervención urbanística cobijada por el Fòrum de les Cultures, cuando se intenta finalmente realizar. En este sentido, es necesario decir, además, que en otros casos la urbanización y mejora de las infraestructuras impulsadas desde la nueva política urbanística daba satisfacción a viejas reivindicaciones populares. Y esta es una de las paradojas de los movimientos del capital y las movilizaciones populares sobre el territorio urbano: la mejora de las infraestructuras y equipamientos de los barrios, reclamadas por los vecinos en los años 60 y 70 (las “batallas” de los vecinos del Besós y el Maresme por el asfaltado de las calles y los semáforos, por ejemplo), una vez el territorio se convierte, en la ciudad-negocio, en fuente de beneficios económicos extraordinarios, pasan a ser “satisfechas” por la Administración municipal como medio para potenciar las condiciones de la valorización del capital privado, tanto en la dimensión de la vivienda como ahora, sobretodo, en su función de infraestructura logística.

De todas formas, el relativamente alto nivel de consenso conseguido en torno a los Juegos Olímpicos y el entusiasmo que envuelve el nuevo proyecto de ciudad no se explica simplemente por la capacidad de manipulación de las diversas instancias de mediación del sistema de representación política, ni por el adiestramiento ideológico de los medios de comunicación de masas. Antes que nada porque el consenso no es un fenómeno mediático. No hay que confundir la expresión mediática o espectacular del consenso (aunque sea en las masivas puestas en escena del voluntariado) con la constitución del consenso en tanto que práctica de adhesión a un sistema de valores prácticos ligados a la vida cotidiana de la gente.

En este sentido, los Juegos Olímpicos crearon unas expectativas para un amplio abanico de gente, empezando por la expectativa de negocio para la pequeña y mediana burguesía ligada a la actividad comercial y de servicios, para la cual los Juegos, además de ofrecer una posibilidad de beneficios a corto plazo en la medida que se iniciaba una especialización de la ciudad como centro comercial internacional (“la millor botiga del món” / “la mejor tienda del mundo”), lugar de destino turístico y de ferias y congresos, etc. , también representaba una perspectiva de consolidación del negocio a largo plazo.

Para la población asalariada, una vez asumido el nuevo pacto social y aceptadas las consecuencias de la reestructuración que barrió los últimos reductos de la resistencia obrera, las expectativas de trabajo y de participación en los beneficios económicos y materiales inducidos por las inversiones olímpicas también jugaron un papel relevante en la construcción práctica del consenso modernizador.

Según las previsiones oficiales de 1987, el impacto económico de los Juegos llegaría al billón de pesetas, con una inversión directa de 429.448 millones. De todas formas, un informe recientemente publicado³ reconoce que el gasto olímpico se evaluó en 913.000 millones de pesetas, al valor de 1992, de los cuales 160.104 millones correspondían al consumo y 753.707 millones a la inversión. Sea como fuere, traducido a términos prácticos, esto representaba una oportunidad de negocio también para pequeños empresarios y trabajadores inscritos en el régimen autónomo de la Seguridad Social con “iniciativa”, que consiguieron insertarse dentro de los niveles más bajos de la cadena de subcontratación de las obras y servicios, homogeneizada por las grandes constructoras, cajas y bancos. No estaría mal evaluar cuantas quiebras e impagos hubo a partir de octubre de 1992 entre los pequeños contratistas, muchos de ellos trabajadores asalariados hasta unas semanas antes, como ahora paletas, lampistas, transportistas, etc. que, deslumbrados por los contratos de suministro a promotores y constructores de la Vila Olímpica y otras intervenciones urbanísticas, vieron la oportunidad de hacerse “empresarios” a pesar de tener que endeudarse con bancos y cajas.

Además, el COOB’92, el presupuesto del cual subía a 106.721 millones de pesetas, permitió repartir una serie de prebendas bajo la forma de puestos de trabajo que, a pesar de ser temporales, también contribuyeron a crear una base social material y práctica del consenso subvencionado.

La realidad es que, contra la aplastante manifestación de consenso que se produjo alrededor de los Juegos Olímpicos, sólo se oyeron algunas voces minoritarias y socialmente aisladas. Desde algunos ateneos libertarios y por el colectivo No’92 se llevaron a cabo actividades de divulgación y de agitación contra los Juegos Olímpicos y su significación política. En cualquier caso, a la hora de evaluar la escasa resonancia de la crítica a las implicaciones sociales y políticas del proyecto modernizador de la Barcelona olímpica se ha de tener en cuenta, sobretodo, la transformación social y de las subjetividades a que dio lugar la reestructuración productiva y la transición política.

La reestructuración no significa simplemente la destrucción de una forma de agregación de la población asalariada ligada a la producción industrial en masa, sino la conformación de la individualidad como referencia fundamental de la subjetividad, una vez destruidos los vínculos laborales con la desregulación progresiva del mercado de trabajo y la extensión del paro. Es decir, la reestructuración capitalista supone una doble ruptura objetiva y subjetiva del individuo que ha sido la base tradicional de la izquierda entendida como entidad opuesta formalmente al capital, a su forma política.

Si añadimos a todo ello que las formas políticas del capital y las del trabajo (partidos y sindicatos de izquierda) pactan un modelo de transición a la democracia que a pesar de la conflictividad ligada a la reconversión industrial de la segunda mitad de los 70 y la década de los 80 pasa por la despolitización creciente de la población y el abandono del compromiso social, nos encontramos con un horizonte social ocupado por la decepción, el vacío, la banalidad y la desvalorización de lo colectivo. Y, sobretodo, hay que tener en cuenta la decepcionante experiencia de la campaña del referéndum contra la integración en la OTAN, cuando las maniobras del PSOE, aliado con los sectores más reaccionarios de la población y la derecha belicista, infligió una derrota política a la izquierda y a las masivas movilizaciones que abrían la posibilidad de una respuesta negativa mayoritaria a los planes de integración en la OTAN.

En esta coyuntura, de profunda mutación social y política en que los aparatos económicos y políticos del capital consolidan su capacidad de iniciativa, las formas y expresiones del conflicto social heredados del pasado sufren un proceso de descomposición y transformación de manera que

el posicionamiento crítico antagonista queda como marginal. En realidad, el proyecto modernizador ligado a los Juegos Olímpicos supuso una aceleración en el proceso de cambio social que acompaña la reestructuración general de las actividades económicas y la reconversión de la ciudad, en el sentido de aumentar la diferencia entre el ritmo de cambio impuesto por las fuerzas más dinámicas del capital y el proceso de reelaboración conceptual y práctica del potencial conflictivo por la izquierda antagonista. Al fin y al cabo, entender la naturaleza y la dimensión del cambio en que estábamos sumergidos no era una cuestión voluntarista de individualidades más o menos lúcidas, sino una cuestión eminentemente práctica⁴.

Todo ello ayuda a entender la relativa facilidad con que se impuso el proyecto 92 y la relativa debilidad de la contestación, a pesar de los numerosos focos de conflictividad aparecidos en los barrios, muy pronto recuperados o extinguidos por la Administración. Lo cual es indicativo de la naturaleza del conflicto en la metrópoli y de los mecanismos de recuperación de la nueva subjetividad ciudadana resultante de la descomposición de la agregación social fordista. Hasta el punto que se podría decir que quizá la revuelta del Besós, barrio de fuerte composición social obrera, fue una expresión tardía de resistencia del proletariado fordista frente a una agresión intolerable contra sus condiciones de existencia.

Es, pues, a partir del modelo de ciudadano esbozado por el proyecto de la *Carcelona 92* consigna de agitación de aquellos días, polarizada entre el frenesí consumista y la normalización represiva, como se ha ido desactivando el potencial de conflictividad y articulando una socialidad gestionada desde la subvención y el gasto público, como medio de adquisición del consenso. Al mismo tiempo se va definiendo una subjetividad desprovista de toda connotación antagonista que da lugar, desde su impotencia real, a la representación de la contestación, tal como tuvimos ocasión de comprobar durante las masivas manifestaciones contra la guerra de los Balcanes y más recientemente, contra la intervención del ejército español en Iraq.

OKUPACIONES Y OCUPACIONES

Sin embargo, existe una conflictividad, digamos, de baja intensidad, el epicentro de la cual son las okupaciones⁵ y, en menor medida, las ocupaciones, altamente significativa, aunque aún no se haya materializado en toda la dimensión de su potencial político.

Tradicionalmente, en los barrios obreros se ha dado una práctica poco extendida, aunque tampoco excepcional, de ocupación del espacio mediante autoconstrucción de viviendas y ocupación de pisos deshabitados; normalmente pisos de protección oficial otorgados a los adictos al “Régimen” que los mantenían vacíos a la espera de poder venderlos una vez finalizado el periodo legal que les impedía la salida al mercado. Eran ocupaciones hechas por el expeditivo procedimiento de la patada a la puerta; una manera, en fin, de resolver el problema de la vivienda, sobretodo durante el movimiento migratorio a las ciudades industriales en los años 60 y 70, cuando el Ministerio de Obras Públicas contabiliza 1754 ocupaciones en los barrios de diferentes ciudades⁶.

Así pues, ocupaciones y okupaciones constituyen dos experiencias de una misma naturaleza política que se manifiestan en dos niveles diferentes, incluso divergentes. Mientras la ocupación aparece como práctica formalmente despolitizada de la reapropiación proletaria del valor de uso de la vivienda para la reproducción del modelo de vida familiar burgués, la okupación se presenta como una práctica formalmente politizada a la búsqueda de modelos de convivencia que rompan con el modelo dominante que deviene, sin embargo, realmente ideologizada y fuertemente autoreferencial.

La dimensión de la okupación como “centro social”, como espacio rescatado o liberado de la Administración y el mercado, a pesar de ser la única expresión relevante del antagonismo político en la ciudad de los últimos años, hasta ahora no ha ultrapasado el nivel embrionario. Quizás porque

esta propuesta de intervención esté fundamentada en la premisa que la disponibilidad de un espacio autónomo y autogestionado “potencia” o “crea” movimiento; una premisa cuya validez, si no quiere quedar en el simple voluntarismo subjetivista, exige, como mínimo, ser planteada con la perspectiva de los elementos prácticos donde se articulan las relaciones sociales, que son de fuerza y de antagonismo, pero también de consenso.

En cualquier caso, se ha de reconocer que, a lo largo de estos últimos años, ha sido la okupación quien ha puesto de manifiesto la dimensión política de la vivienda. Y en este punto nos encontramos en una situación paradójica donde cabría preguntarse como es que el ejemplo de la okupación, a pesar del arraigo y legitimación de muchas okupaciones en su entorno inmediato del barrio, y dado que la vivienda es uno de los principales aspectos políticosociales de las ciudades, no ha tenido (hasta ahora?) un efecto práctico más allá de una pequeña fracción de la población joven.

Las razones de esta limitación no se han de buscar solamente en el interior del fenómeno okupa sino, sobretudo, en la coyuntura sociopolítica y en los mecanismos de gestión de la conflictividad de la ciudad-negocio, tal como vimos a propósito del proyecto de 1992. Tampoco la okupación es, en este momento, un tipo de movilización demasiado generalizada y cohesionada (hay una falta de homogeneidad, por su diversidad de inspiraciones, propuestas y proyectos) como para considerarla un movimiento social, a pesar del uso abusivo que últimamente se hace de este término. De hecho, lo que unifica la okupación es una voluntad de arrancar espacios al circuito de la mercancía y una radicalidad de la práctica inmediata (acción directa de okupación) que muchas veces ha sido subsumida por lo que podríamos decir una excesiva preocupación por el discurso y la formalidad subversiva, el cual ha dado como resultado una percepción de la okupación fácilmente recuperable por el reduccionismo mediático, como una verbalización de la subversión y estética de representación de la radicalidad. De manera que podría decirse, como sucede en otras expresiones de la contestación social en los países capitalistas desarrollados, que la práctica del discurso de la radicalidad sustituye el discurso práctico de la radicalidad.

Quizá por ello y a fin de evitar la invocación de la vivienda como derecho ciudadano, en tanto que argumento de clara connotación reformista, no se ha profundizado en la dimensión política de la vivienda más allá de su consideración como derecho formal y se ha optado por fijar la okupación dentro de una especie de cantonalismo que autolimita las posibilidades de una eventual convergencia con la ocupación.

Uno de los principales hándicaps de este ciclo de la okupación ha sido, precisamente, no haber profundizado en la crítica práctica de la mercancía vivienda, planteada más allá del reducto de afinidad o de intereses grupales, lo que ha dado lugar, por otro lado, a la percepción de la okupación como un fenómeno generacional de jóvenes de clase media amenazados por el proceso de proletarización (precarización).

A pesar de todo, la represión desplegada (criminalización y desalojo) y la estrategia de tensión puesta en marcha por las autoridades contra la okupación se ha de entender en un sentido mucho más amplio que el de hacer frente a un problema de gobernabilidad o de orden público de la ciudad y sus proyectos de transformación mercantil. Para las autoridades y el conjunto del aparato de control y gestión social con la represión de la okupación se trata de abortar una dinámica que pone de manifiesto, en el caso concreto de la vivienda, la cuestión de la apropiación privada de la riqueza socialmente producida.

Esta es, probablemente, la clave de un problema cuyo alcance puede tomar una dimensión política netamente desestabilizadora del proceso de acumulación del capital difuso por el territorio, tal como demostraron las movilizaciones en torno a las autoreducciones y ocupaciones de los años 70 en Francia e Italia, o las autoreducciones llevadas a término en algunos barrios en la década de los 60⁷. Autoreducciones que tenían una prolongación también en la inducción del llamado “precio político” de los servicios públicos que caracteriza el Estado del bienestar o la exigencia de extender

la red de transporte público hasta los barrios obreros y la reivindicación de transporte gratuito. El precio del agua, como veremos más adelante, es también un caso parecido.

La vivienda, convertida en mercancía de alto valor añadido por la vía de la especulación, aparece como un mecanismo complementario de expropiación de los asalariados “fuera” del puesto de trabajo. Así lo entendieron las miles de personas que en aquellos años respondieron a la expropiación capitalista en el terreno de la reproducción social con un contraataque en el mismo terreno: la reapropiación social de la riqueza socialmente producida, rechazando pagar alquileres, transportes públicos, electricidad, agua, etc. Dado que la inflación y la especulación inmobiliaria eran dos mecanismos del capital para neutralizar las conquistas obreras fuera de la fábrica, la respuesta obrera pasaba por la intervención y reapropiación directa de la mercancía en tanto que producto, sin respetar las leyes del mercado y su valor de cambio. De esta manera, se atentaba prácticamente contra la naturaleza estrictamente capitalista de la mercancía que, desprovista de su valor de cambio, recuperaba la dimensión de valor de uso; dicho de otra manera, era una forma de salario indirecto obtenido por la acción directa de los asalariados.

Sin duda estamos hablando de unas intervenciones que sólo se pueden entender en el contexto del ciclo de las movilizaciones obreras de los años 70 y que nada, o muy poco, tienen que ver con la realidad actual. Ahora bien, la evocación de aquellas experiencias aquí no está motivada por la añoranza de los buenos tiempos pasados, sino para subrayar la diferencia en cuanto a la función de la vivienda como eje de intervención en el proceso de resistencia a la expropiación capitalista tanto de ayer como hoy. Quizá desentrañar esta diferencia permitirá entender la escasa resonancia social de la okupación, como resultado no sólo de las propias limitaciones del “movimiento”, sino sobretudo como consecuencia de las limitaciones impuestas por el contexto general definido por la actual fase de las relaciones sociales y la evolución de los mecanismos de integración y gestión de los potenciales conflictos.

Como se ha comprobado en Barcelona, por ejemplo, la represión (desalojos) es la primera medida del poder para garantizar la expropiación capitalista del territorio, especialmente, cuando esto no supone un coste político, económico y social excesivo para las instituciones de control y representación. Ahora bien, cuando el alcance de la onda de okupaciones o su incidencia en una determinada coyuntura sociopolítica amenaza desbordar unos ciertos límites, entonces la Administración plantea la negociación. Así ha sido en muchos casos en distintas ciudades europeas con resultados igualmente distintos sobre las políticas municipales de vivienda (control de alquileres, usufructo durante toda la vida en condiciones “fuera de mercado” de los espacios okupados, etc.)

Y esta es una cuestión abierta e inevitable a la que se ha de dar respuesta práctica, teniendo en cuenta que a pesar de que no haya contradicciones fundamentales, ni luchas finales, ni sujeto capaz de encabezar el objetivo emancipador etc., a pesar de que las grandes palabras del lenguaje revolucionario sirvan de poco, sí que hay una realidad de la mercancía que, por lo que se refiere a la vivienda, es susceptible de ser subvertida y sabotada en su contenido específicamente capitalista y mercantil y en definitiva, reapropiada prácticamente. Porque bajo la perspectiva de las movilizaciones sociales y obreras de las últimas décadas en Europa, que han tenido un aspecto más remarcablemente autónomo y anticapitalista, vemos que lo más importante no es el *qué* sino el *cómo*, y el lugar desde el cual se habla y se interviene.

La característica fundamental que distingue la radicalidad real de las movilizaciones sociales es su capacidad de crear comunidad de resistencia y de autonomizar esta comunidad de lucha sobre una lógica de confrontación propia, en ruptura con la lógica dominante de las leyes de la economía y el mercado, con tal de imponer unos objetivos o, como sucedía con las huelgas autónomas en el Estado español en los años 70, unas condiciones favorables de negociación a los intereses de la clase trabajadora.

Es desde este horizonte que se ha de evaluar la experiencia de la okupación y no bajo las formas banalizadas del éxito o el fracaso, de la derrota o la victoria. De la misma manera que sería una tontería tildar de fracaso el movimiento de la insumisión porque su acción haya llevado al Gobierno a reconvertir el aparato militar en un ejército de mercenarios.

No creo que se pueda entender la okupación, al igual que el resto de los llamados movimientos sociales, única y básicamente explicada por las limitaciones subjetivas y el voluntarismo de sus protagonistas. Habrá que tener en cuenta también las variables “objetivas” que definen el entorno en el que acontecen las movilizaciones ciudadanas y los dispositivos de gestión de la gobernabilidad de la metrópoli en el capitalismo desarrollado.

Y no sólo es necesario desmenuzar los elementos de control social directos (tal como se hace en el capítulo 11 de este libro), sino también aquellos otros elementos, digamos indirectos, que hunden sus raíces en las profundidades del tejido social y que se usan como amortiguadores del potencial conflictivo. Aquí sólo citaremos unos cuantos, a modo de ejemplo, con tal de ilustrar estos mecanismos “indirectos” de articulación social puestos en acción por los gestores del nuevo modelo de ciudad-negocio, que tienen como objetivo la desactivación social de la ciudadanía, señalando igualmente las limitaciones.

Desactivación ciudadana

Entre estos elementos de desactivación o de formación del consenso ciudadano, según se mire, habría que subrayar la manera como la disgregación del trabajo fondista ha inducido una creciente precarización (inestabilidad, temporalidad, etc.) que, a pesar de su carácter fundamentalmente negativo para la fuerza de trabajo, tiene una relativa ambivalencia en la medida que permite la integración laboral de mujeres y jóvenes, principalmente, en trabajos desregularizados y descualificados (mal pagados, por tanto) que suponen, sin embargo, una contribución neta al fondo de salario familiar. Así, hasta cierto punto y de manera sesgada, el capital realiza el programa de los reformistas de principios de los 90 sobre el reparto del trabajo...

El pacto social que hizo posible la reestructuración (control de los salarios, estabilidad productiva, reestablecimiento de la cuota de beneficio de las empresas, pérdida de derechos en el lugar de trabajo, etc.) ha dado un margen de control sobre el gasto público y el control de la masa monetaria circulante de manera que los bajos tipos de interés faciliten el acceso a la propiedad de la vivienda, con hipotecas de hasta treinta años!

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad del patrimonio familiar acumulado para hacer frente a los tiempos adversos y a la precarización de los hijos. Las luchas obreras de la década de los 70, cuando los aumentos salariales iban por delante de la productividad, hicieron posible, junto con el aumento del nivel de consumo de la población asalariada, la acumulación de un cierto patrimonio que se materializaba sobretodo en la propiedad del piso y una capacidad de ahorro de las familias que es el cojín que soporta la precarización de los hijos.

Además, la ciudad-negocio ha creado las condiciones para una doble valorización de los ingresos familiares y un alargamiento de la estratificación social con la llegada de la inmigración. Por un lado, la inmigración, con papeles o sin ellos, representa una posibilidad de abaratar costos en los pequeños negocios familiares insertados en los niveles inferiores de la cadena de subcontratación del sector terciario y productivo; por otro, la posibilidad de alquilar una criada latinoamericana, con papeles y carta de presentación, por 450 euros/mes con jornadas semanales de seis días y medio, permite una considerable reducción de los costes de reproducción familiar, de forma que cada miembro de la familia pueda acceder a un lugar de trabajo mejor remunerado que el trabajo doméstico. En fin, todo esto es, por decirlo de algún modo, además de una expresión del grado de penetración del principio fundamental de valorización capitalista en las conciencias y en las prácticas cotidianas de una parte considerablemente amplia de la ciudadanía, una especie de

contratendencias al proceso general de expropiación capitalista de la población asalariada que la alarga en el tiempo y la hace más tolerable.

LA GUERRA DEL AGUA

Por su alcance entre la población y por la duración que tuvo, desde 1991 al 2000, pero también por sus propias características, el conflicto del agua en Barcelona ⁸ es bastante significativo de lo que ha sido un movimiento de autoreducción del recibo del agua que, quizá porque faltaba la radicalidad de las autoreducciones de los 60 y 70, no tuvo la proyección política que hubiera sido de esperar. El encarecimiento del agua en Barcelona y en toda el área metropolitana es una tendencia constante desde los años 70, aunque fueron los aumentos de los impuestos sobre el consumo de agua del año 91, considerados abusivos por la gente, lo que desató un movimiento espontáneo de rechazo al pago de los aumentos.

La dimensión del conflicto, a través del boca-oreja entre los vecinos, tiene una progresión constante hasta conseguir entre 80.000 y 85.000 contadores asociados a la campaña de “desdomicialización” de los recibos; es decir, el pago en una nueva cuenta, frente a la negativa de la Compañía de Aguas a aceptar el pago del recibo autoreducido. Esta insumisión fiscal representaba un volumen de impuestos impagados de 7.500 millones de pesetas a mediados de 1999. Como siempre, las instituciones de mediación fueron a remolque de la iniciativa espontánea y autoorganizativa de los vecinos hasta que su intervención abrió dos vías de desarrollo del conflicto, una horizontal, resultado de la dinámica de acción de los barrios y otra vertical, constituida por las instituciones de mediación.

Así, a principios de 1992, aparece la Plataforma sobre la Composición del Recibo y el Precio del Agua, constituida por los sindicatos UGT y CCOO, organizaciones de consumidores y la CONFAVC. Se establece así una doble dinámica entre lo que podemos llamar acción directa de los vecinos, con acciones colectivas y la intervención de negociación institucional de la Plataforma. Todo el conflicto estará presidido, desde entonces, por un estira y afloja entre la instancia de representación de la Plataforma, que imprime al conflicto unas formas y unas tácticas de negociación orientadas a consolidar su función de mediación y a rentabilizar en términos de representatividad, y las acciones vecinales (cortes de calles, no pago de impuestos, etc.).

La Plataforma juega en una primera fase la táctica de la activación/desactivación de la protesta, de acuerdo con la clásica fórmula del sindicalismo consistente en la dinámica presión/negociación, con tal de impedir que, como reconocían los representantes de la Plataforma, “si no hay negociación, el problema del agua acabará en un movimiento incontrolado antiimpuestos”⁹. Por otro lado, los intentos de la Compañía de Aguas por cortar el agua encontraron la oposición práctica de los vecinos que, además de dificultar el acceso a las viviendas de los operarios encargados de cortar el agua, organizaron su propio servicio para el reestablecimiento del suministro, mediante los GAL (Grupos Autónomos de Lampistas).

En realidad, dos lógicas aparecen en el conflicto del agua: en la base del movimiento prevalece el objetivo de dejar de pagar como sea los impuestos abusivos; mientras en los niveles de representación de arriba se intenta limitar los aumentos de la factura, introduciendo unos criterios de racionalización en la gestión del agua.

La lucha contra los impuestos del agua es un caso muy ilustrativo de cómo la prolongación de un conflicto y los enroscamientos de las negociaciones pueden ser una táctica de los negociadores para agotarlo y desvirtuarlo. De hecho, la resolución del conflicto dejó constancia, una vez más, de cómo la izquierda institucional se ha convertido en un recurso para la corrección y la racionalización del capitalismo en crisis.

Ha sido la izquierda y el argumento ecologista, concretamente, que se añadió en el tramo final del conflicto, quien ha legitimado la conversión del agua en mercancía. Bajo el argumento de que se trata de un bien escaso, y de la necesidad de conseguir un consumo “responsable”, el agua ha entrado definitivamente en el mercado. Los impuestos “arbitrarios” de la compañía son ahora legítimos porque el recibo contempla la inclusión del coste integral del ciclo del agua, según preconiza la llamada nueva cultura del agua.

El hecho de que las instituciones de mediación hayan conseguido finalmente desviar el movimiento y colar los aumentos cambiando el nombre bajo el que aparecen en el recibo, habrá que explicarlo, entre otras razones, por el debilitamiento que produce la reestructuración sobre la comunidad de resistencia que daba soporte al movimiento de las autoreducciones de las décadas pasadas y por el simultáneo fortalecimiento institucional de las organizaciones de mediación vecinal, sindicales, etc., plenamente integradas y financiadas dentro del sistema de representación, y funcionalmente orientadas a la gestión del consenso ciudadano y al mantenimiento del orden capitalista.

Llegados a este punto, habría que concluir que, hoy por hoy, el despliegue de la dominación del capital de la fábrica hacia la metrópoli no ha conseguido una agregación o recomposición de una subjetividad antagonista relevante, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que esta relación social que llamamos Capital haya resuelto las contradicciones inherentes a su desarrollo metropolitano.

Cabría preguntarse, pues, sobre los límites de los mecanismos y de los recursos de integración puestos en marcha para conjurar el conflicto desde la Administración y las instancias de mediación. Si, aparentemente, el desplazamiento de la producción hacia la periferia capitalista ha transformado la población terciarizada de la metrópoli de productora en consumidora y ha creado una base de adhesión y consenso bajo la forma de ciudadanismo, la realidad es que la acumulación de capital a escala mundial padece serias dificultades que repercuten sobre el “coste” del consenso ciudadanista.

La especialización de Barcelona en un parque temático para el turismo y su constitución como sede de actividades culturales y administrativas hace que la necesidad de intensificar la expropiación de los ciudadanos y el encarecimiento de la vida en Barcelona es una muestra pueda provocar una grieta en los fundamentos del consenso. Asimismo, la revalorización especulativa de una de las mercancías básicas, tal como la vivienda, aparece como uno de los mecanismos más operativos a corto plazo de transferencia de los ingresos del trabajo a las rentas del capital.

Y para acabar, hay que decir que, a partir de los conflictos más recientes y significativos como la guerra del agua y las okupaciones/ocupaciones, y a pesar de sus limitaciones, se perfila una línea de intervención política, que unida a las experiencias de lucha del pasado (autoreducciones) en torno al salario indirecto, contra la expropiación de la población por las diferentes fracciones del capital, podrían ser el punto de arranque de un nuevo ciclo del antagonismo de clase en el sí de la metrópoli. En este sentido, las plataformas contra la especulación¹⁰, que reúnen colectivos de muy distintas características, junto a las iniciativas como las movilizaciones de Cal Suís en Esplugas o Can Masdeu, o la línea de defensa de la Hamsa¹¹, quizá sean los primeros pasos de un encuentro de la okupación y la ocupación capaz de impulsar el contenido político en el caso concreto de la lucha por la reapropiación del espacio urbano.

C. Vela

Notas

1. Ver una breve cronología en *Primeres jornades No '92*.
2. En la revista *Etcétera*, núm. 17, encontraréis algunos detalles de este conflicto. Otro texto importante sobre la conflictividad en los barrios durante los años 70 es: *Lucha de barrios en Barcelona*, Elias Querejeta Editor, Madrid, 1976.
3. Memòria socioeconòmica de Barcelona 2001, pág. 130, nota 11.
4. Una de las publicaciones de referencia crítica de la Barcelona olímpica y su significado fue *A/parte*, una publicación nacida sobre los pasos de *Parte en la guerra* mantenida durante la guerra del Golfo y *Parte en la Post-Guerra*, que representó hasta cierto punto una respuesta crítica a la nueva realidad de la conflictividad social inscrita en el territorio urbano. En el núm. 5 hay un pequeño balance de lo que fue la contestación al proyecto de la Barcelona del 92.
5. Entre otras fuentes de información dispersa como los documentos producidos por los propios colectivos okupas, ver *Ocupación, represión y movimientos sociales* (Diatriba y Traficantes de Sueños, Barcelona 2000, Madrid 2001), y las entradas correspondientes a *La Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silenciada* (Octaedro-Límites, 2003).
6. *Vivienda: especulación & okupación*, Likiniano Altxorra/Donostialdeko Okupazio Batzarra, pág. 46.
7. *La Barcelona rebelde*, pág. 140, en lo referente al barrio del Besós. Otras luchas de autoreducciones tuvieron lugar en Santa Coloma de Gramanet y Nou Barris, llegando al secuestro de autobuses.
8. Para una crónica y análisis pormenorizado de este conflicto, ver el capítulo “Las periferias de Barcelona en lucha contra los negocios del agua”, en *Agua, mercancía o bien común*, de H. Rosenberger, R. Germinal, A. Ordiguer i M. Gavalda (Alikornio ediciones, Barcelona 2003).
9. *Op. cit.*, pág. 255.
10. Más información en www.plataformabcn.net
11. Ver, por ejemplo, el documento publicado desde la Hamsa, encabezado por el logo del centro: *Hamsa Centre Social Autogestionat* (diez páginas sin fecha ni título).